

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : Juzgado De Letras Y Gar. de Curepto  
CAUSA ROL : C-72-2016  
CARATULADO : EPULEF/INZULZA

Curepto, cuatro de Enero de dos mil diecinueve

Visto:

Que a folio 1, con fecha 06 de diciembre de 2016, comparece doña **Fabiola Andrea Epulef Contreras**, C.I. N° 16.857.079-1, Administrativa, domiciliada en población Francisco Meza Seco, block número 286 departamento 301, Comuna de Constitución, por sí y en representación de **Oscar Eduardo Epulef Contreras**, C.I. N° 18.029.068-0, Chofer, domiciliado en población Francisco Meza Seco, block número 286 departamento 301, Comuna de Constitución y doña **Erika del Pilar Contreras Pereira**, C.I. N° 11.457.280-2, en representación a su vez del menor de edad **Martín Alejandro Epulef Contreras**, C.I. N° 22.029.933-3, Estudiante de básica, con domicilio en población Francisco Meza Seco, block número 286 departamento 301, Comuna de Constitución, quien conforme lo dispuesto en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 2314 y siguientes del Código Civil, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 108 letra A del Código Procesal Penal, deduce demanda civil de Indemnización de Perjuicios, en contra del conductor del bus P.P.U. UF-6177, marca Mercedes Benz, modelo OF172159, blanco, verde y azul, don **ELIAS NATANIEL MIRANDA CARVAJAL**, C.I. N° 8.236.013-1, Chofer, domiciliado en Calle Los Eucaliptus N°2011, comuna de Curepto y solidariamente en contra del propietario del bus P.P.U. UF6177, don **OSCAR MAURICIO INZULZA SALGADO**, ignoro profesión, C.I. N° 11.174.922-1, domiciliado en calle Fray Pedro Armengol, número 36, comuna de Curepto de acuerdo a lo que se expone:

**Los Hechos:** El día 7 de junio del año 2016, su padre Oscar Humberto Epulef Salas, C.I. N° 9.638.263-4, fallecido, conducía un camión placa patente única UW-4464 en dirección hacia el norte, por la ruta J-60 y en sentido contrario lo hacia el bus P.P.U. UF-6177 conducido por el demandado Elías Nataniel Miranda Carbajal, según consta en el relato del personal aprehensor que participó en el accidente y, además de testigos presenciales del accidente, el bus era conducido en forma zigzagueante por parte del demandado, impactando previamente otro camión, rompiéndole su espejo izquierdo, para posterior a eso, chocar un furgón y después de haber colisionado dos veces, impactar casi de frente el camión que era conducido por su padre, resultando el mismo fallecido y el camión completamente dañado, como consecuencia directa del actuar culpable del demandado, todo lo cual se encuentra en etapa de investigación por parte de la Fiscalía Local de Licantén en causa RUC 1610039196-5, cuya formalización se realizó el día 25 de octubre de 2016 en causa RIT 427-2016.

**El Derecho:** El demandado vulneró lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 18.290, que dispone la obligación de todo conductor de mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad que determine la Ley; asimismo, la obligación del inciso segundo la norma citada, que dispone que todo conductor deberá estar atento a las normas de tránsito del momento. Además el artículo 165 de la citada Ley que establece que toda persona que conduzca un vehículo que haga peligrar la seguridad de los demás, sin consideración a los



**Foja: 1**

derechos de estos o sin respetar las reglas de tránsito y seguridad establecidas por la Ley, será responsable de los perjuicios que de ello provengan.

A su vez los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, regulan la materia, estableciendo la obligación de quien ha causado daño es indemnizarlo, sin perjuicio de la pena correspondiente en derecho. Por su parte el artículo 2329 refiere que todo daño imputable a malicia o negligencia de una persona deben ser representados por esta se necesita que concurra entonces CAPACIDAD CIVIL; ACCIÓN U OMISIÓN ILÍCITA; CULPA O DOLO EXTRA CONTRACTUAL, DAÑO, Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD. Todos los requisitos se reúnen en la especie por lo que precede que el Juez de Letras acoja la DEMANDA CIVIL DEDUCIDA.-

La solidaridad del demandado está dada por la norma del artículo 169 de la Ley 18.290, correspondiente a la Ley de tránsito.-

**ESTIMACION DEL DAÑO:** La conducta ilícita del demandado civil y el solidario en esta causa ha causado un daño en su familia, por los siguientes conceptos:

**DAÑO EMERGENTE:** \$3.000.000, correspondientes a los diversos gastos en que tuvieron que incurrir los demandantes durante la Hospitalización de don Oscar Humberto Epulef Salas, C.I. N° 9.638.263-4, quien a pesar de los esfuerzos desplegados por el personal médico, falleció en el hospital de Curicó, por conceptos de viajes, alimentación y medicamentos, como así mismo tuvieron que comprar en forma anticipada la sepultura en el parque Altos del Maule.

**LUCRO CESANTE:** \$78.000.000. La víctima generaba recursos (utilidades) para su familia, por lo menos por \$6.000.000.- seis millones de pesos anuales esto en base solo a su renta mensual considerando sólo los 13 años que le quedaban más de vida laboral útil, su familia, su viuda, ha dejado de percibir por lo menos \$78.000.000.-

**DAÑO MORAL:** La pérdida de un ser querido en las condiciones tan injustas, tan abruptas y tan sin sentido como aconteció en este caso, trae aparejado un dolor y sufrimiento que no tiene mitigación ni consuelo. Así, para su mujer Erika del Pilar Contreras Pereira, el perder al compañero de más de 30 años de vida juntos, a aquel junto a quien se espera vivir los últimos días del matrimonio, con quien naturalmente se debería envejecer, a quien debió observar la forma trágica de su muerte, no tienen parangón. Queda sola, sin más apoyo que sus hijos y sus nietos, sin la persona que además de ser su compañero, el padre de sus hijos, era su sostén económico de una familia. Un hombre cariñoso, respetuoso de su hogar, con quien habían formado una hermosa familia. A quien pierde cuanto todo era disfrute y tiempo para ellos comenzando a retomar la crianza con sus nietos, para malcriarlo. En cuanto a los hijos, su dolor no es menor, su padre lo fue todo en la vida, un ejemplo a seguir, un hombre esforzado, que empezó de la nada, y que con mucho esfuerzo, trabajo y perseverancia, había logrado formar una pequeña fortuna, suficiente para mantener una familia, y que a esta nada le faltara. Les dio cariño, valores, educación, y por sobretodo compañía. Un padre siempre presente, con sus consejos permanentes, un amigo para hacer de sus hijos unas personas de bien. Señala que se estima la suma de \$200.000.000, por el concepto daño moral.

Cita el derecho en los artículos 2314 y siguientes Código Civil, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y artículo 169 de la Ley 18.290 y pide en definitiva se tenga por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de **ELIAS NATANIEL MIRANDA CARVAJAL**, C.I. N°8.236.013-1, Chofer, domiciliado en Calle Los Eucaliptus N°2011, comuna de Curepto y solidariamente en contra del propietario del bus P.P.U. UF.61.77 indicado don **OSCAR MAURICIO INZULZA SALGADO**, ignora profesión, C.I. N° 11.174.922-1, domiciliado en calle Fray Pedro Armengol, número 36, comuna de Curepto, para que se condene a los demandados a pagar por concepto de Daño Emergente, Lucro Cesante y Daño Moral la suma de \$281.000.000, o la suma que su señoría determine conforme al proceso. Todo reajustado a la fecha efectiva del pago, con expresa condena en costas.

Que a folio 11, con fecha 11 de enero de 2017, doña **ANA BELEN SAAVEDRA HERNANDEZ**, Abogada, C. I. N° 16.914.690-k, domiciliada en Calle Tierra del Fuego N° 839, Villa los Prados del



**Foja: 1**

Valle, comuna de Curicó, en representación de don **ELIAS NATANIEL MIRANDA CARVAJAL**, chileno, Cédula Nacional de Identidad N° 8.236.013-1, chofer, domiciliado en Población Eucaliptus Calle 1, Número 2011, de la comuna de Curepto, demandado en causa ROL C-72-2016, caratulada EPULEF/INZULZA, quien en el primer otrosí de su presentación viene en contestar la demanda interpuesta en contra de su representado, solicitando desde ya el rechazo de la misma en todas sus partes, con expresa condenación en costas, en base a las consideraciones de hecho y derecho que se expone:

**1. LOS HECHOS:** **1.1.** Su representado mantiene contrato de trabajo con don **OSCAR MAURICIO INZULZA SALGADO**, desde el 1 de septiembre de 2011, como chofer de buses de la empresa que éste tiene en la comuna de Curepto. **1.2.** En virtud de tal vínculo laboral, don Elías Miranda salió de Curepto en dirección a Iloca (ruta J 60), el día 7 de junio del año 2016, aproximadamente a las 6.00 de la mañana, con la finalidad de comenzar desde Iloca el recorrido hacia la ciudad de Talca, que ya se había realizado el día anterior a la misma hora. **1.3.** Desde hace un tiempo al día del accidente, se estaban realizando trabajos en la ruta J 60, por lo que el día anterior se encontraban banderilleros en el camino, ya que hasta ese momento **NO HABÍA EJE CENTRAL NI LATERALES DEMARCADOS**, de manera que era absolutamente necesario para evitar accidentes la presencia de señaléticas especiales que sí estaban presentes el día 06 de junio en la misma ruta y a la misma hora. **1.4.** El día 07 de junio, al avanzar en la ruta J 60 para llegar a Iloca, su representado se da cuenta que a diferencia del día anterior, **NO HABÍA NINGÚN TIPO DE SEÑALÉTICA NI BANDERILLEROS EN EL CAMINO** y **AUN NO ESTABAN DEMARCADOS LOS EJES**, por lo que baja la velocidad del bus que manejaba para mantenerse dentro de la ruta. Cabe señalar que en ese momento, y tal como lo señala el informe de la SIAT que consta en causa RUC 427-2016 del Tribunal de Garantía de Licantén, existía una neblina espesa, que según como lo relatan testigos y su propio representado, no permitía una correcta visibilidad (no más de 20 metros), además del camino altamente resbaladizo, por el clima frío y húmedo imperante en invierno en la costa. **1.5.** A poco andar del camino, su representado viajando a baja velocidad (no más de 60 kilómetros por hora, tal como lo declaró el mismo día del accidente) y con todas estas condiciones en contra, se dispone a frenar el bus paulatinamente y detenerlo, para ver cómo continuar el viaje que estaba enfrentando en ese momento, ya que fue consciente que todas las condiciones que se presentaban configuraban un peligro tanto para él como para otros conductores. **1.6.** Mientras su representado se encontraba bajando la velocidad del bus, y en cosa de segundos ve una luz encima de él y siente un gran estruendo que detiene el viaje, y que fue el impacto en contra del camión placa patente única UW-4464 que venía en dirección hacia el norte y era conducido por don **OSCAR HUMBERTO EPULEF SALAS**, quien más tarde falleció producto de las lesiones ocasionadas por este lamentable accidente. **1.7.** Don Elías Miranda, al momento del impacto, no pierde la conciencia y a los minutos escucha conversaciones de personas que estaban presenciando el accidente, ve luces de linternas ya que no había visibilidad por la neblina espesa y porque aún, a las 6.50 AM, hora aproximada del accidente, estaba en total oscuridad el camino, ya que tampoco este contaba con alumbrado público. Con mucha dificultad les grita a estas personas que él estaba vivo y atrapado en el bus que conducía y pide que lo ayuden. Es sacado del vehículo y posteriormente trasladado al Hospital de Licantén por personal del SAPU, desde el cual a su vez lo trasladan al Hospital de Curicó, por la gravedad de las lesiones. **1.8.** Producto del grave y lamentable accidente ocurrido la mañana de 7 de junio de 2016, su representado sufre fracturas de gravedad en el lado izquierdo de su pierna, que incluyen una Multifractura de Cadera y fracturas de tibia y peroné, que obligan al equipo médico del Hospital de Curicó a realizarle en los tres días siguientes al accidente, tres diferentes operaciones con anestesia general, para poder reparar en parte el daño sufrido. **1.9.** Hasta el día de hoy se encuentra con licencia médica, ya que por la gravedad de sus lesiones no puede retomar su trabajo de chofer, que es en lo que se ha desempeñado durante toda su vida con un historial impecable, sin ni siquiera tener un parte policial en su contra y ninguna causa anterior por ningún motivo y menos verse envuelto en algún accidente de este tipo. **1.10.** Cabe señalar que al día siguiente de producido



**Foja: 1**

el accidente, la concesionaria a cargo de los arreglos de la ruta J 60, demarcó el camino con sus ejes centrales y laterales, que el día anterior no estaban marcados.

**2. EL DERECHO. 2.1. FALTA DE CONCORDANCIA DE LAS NORMAS ESPECIALES CITADAS POR LA CONTRARIA**

La parte demandante indica que su representado vulneró diferentes derechos que aparecen en la Ley de Tránsito N° 18.290, específicamente los artículos 108 y 165 de la citada ley, basando su demanda en este texto legal y en esos artículos determinados. Sin embargo al recurrir al texto oficial, dichos artículos no se condicen con lo que trata esta causa y menos con lo que señala el escrito de demanda respecto a ellos. De hecho, la contraria señala que el artículo 108 dispone la obligación del conductor de mantener el control del vehículo y de estar atento a las condiciones del tránsito, sin embargo lo que verdaderamente dice es *“Los conductores, salvo señalización en contrario, deberán detener sus vehículos antes del cruce ferroviario y sólo podrán continuar después de comprobar que no existe riesgo de accidente”*. A mayor abundamiento, y a diferencia de lo que señala la contraria en su escrito, el artículo 165 contiene las disposiciones generales respecto al uso de las vías públicas, cuestión que en esta causa no tiene relación citar.

Así las cosas, considera que lo mínimo para pretender iniciar una causa, es que se haga un análisis de las disposiciones existentes en nuestro ordenamiento jurídico, para así poder encasillar los hechos en ella. Aún más, tomando en consideración el alto monto indemnizatorio que los demandantes están pidiendo a su representado, por lo que en el umbral más bajo de exigencia es que se preocupen, al menos, de citar las normas que corresponden para acusarlo de hechos tan graves, como su responsabilidad directa en la muerte de una persona, que les ha generado daños resarcibles civilmente.

**2.2. AUSENCIA DE RELACION DE CAUSALIDAD ENTRE LA ACCION Y EL DAÑO.**

Sin perjuicio de las imprecisiones anteriores, la contraria funda también su pretensión en las reglas generales de responsabilidad extracontractual, contenidas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, precisando que en este caso sí se encuentran cumplidos los requisitos que en doctrina se exigen para que se pueda acreditar que existe responsabilidad, y que son la capacidad civil, acción u omisión ilícita, culpa o dolo, daño y relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño. La Ley de Tránsito N° 18.290, en su artículo 171 señala: *“El mero hecho de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido por el accidente. En consecuencia, si una persona infringe alguna disposición y tal contravención no ha sido causa determinante de los daños producidos, no estará obligado a la indemnización.”*. En este sentido, señala que el requisito de la causalidad entre el daño y la acción no se encuentra cumplido, ya que el día 07 de junio de 2016, al circular el bus conducido por su representado, existían otras condiciones que fueron concluyentes para que el accidente se produjera. Don Elías Miranda, una persona del todo prudente, sin antecedentes anteriores durante todos los años que ejerció como chofer de bus, iba conduciendo bajo condiciones en su contra, que eran LA FALTA DE VISIBILIDAD POR LA NIEBLINA ESPESA, SIN DELIMITACION DE LOS EJES DE LA CALZADA, AUSENCIA DE SEÑALETICA DE REEMPLAZO, PISO RESBALADIZO y AUSENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

A este respecto, cita al profesor Juan Manuel Prevot que en este tema señala lo siguiente: *“Con gran frecuencia el daño deriva de una serie concatenada de acontecimientos, o lo que es igual, de una pluralidad muy diversa de causas; y todas ellas, con independencia de que sean directas o indirectas, remotas o próximas, constituyen un antecedente sin el cual el resultado final no se hubiese verificado. Cuando esto sucede, el práctico del Derecho se encuentra ante la encrucijada de establecer a cuál o, a cuáles, de todas estas causas (o condiciones), corresponde atribuir relevancia jurídica. La complejidad del asunto proviene de que los hechos no aparecen perfectamente*



**Foja: 1**

*dibujados, sino que, de ordinario, integran un conjunto o masa de acontecimientos que actúan como factores determinantes, condicionantes o coadyuvantes de sucesivos fenómenos, y que se interfieren recíprocamente en sus respectivas derivaciones, de manera de presentar un panorama borroso que dificulta descubrir el nexo de causalidad que se está indagando.”*3. Así las cosas, viene a señalar de manera tajante que el accidente no hubiera ocurrido si las condiciones de planificación vial y naturales del momento –pero por sobre todo la falta de eje central y lateral de la ruta –, hubieran sido idóneas, por ende se habría podido evitar el accidente. Esas condiciones ROMPIERON EL NEXO CAUSAL DEL ACCIDENTE atribuido a la conducción de su representado, puesto que no fue sólo su supuesto accionar imprudente el que lo provoca, sino un cúmulo de hechos y condiciones que confluyeron en ese momento, y que provocaron finalmente el terrible fallecimiento de don Oscar Epulef y graves lesiones a su representado.

Por todo lo anterior es que a don Elías Miranda NO LE CABE NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA, ya que de no haber existido todas las condiciones que expone, esto no habría ocurrido.

**2.3. VALORACIÓN DE LOS DAÑOS.**

**2.3.1. DAÑO EMERGENTE.** La parte demandada solicita que se condene por daño emergente, en la suma de \$3.000.000 por concepto de hospitalización de don Oscar Epulef, además de viajes, alimentación y medicamentos y la compra “anticipada” de la sepultura.

Entendiendo el daño emergente como el empobrecimiento real y efectivo del patrimonio que ha sufrido el daño, cabe señalar que don Oscar Epulef falleció el mismo día del accidente, a las 10.30 hrs., en el Hospital de Talca (y no en Curicó como se señala en la demanda), establecimiento público que según la información sabida, no cobra por los servicios que presta en atenciones de urgencia como lo fue este caso. Además, es un hecho de la causa que don Oscar Epulef lamentablemente muere a las pocas horas, por lo que el concepto de “hospitalización” debería ser aclarado y acreditado por la contraria, ya que no es difícil concluir que al ser una víctima fatal no estuvo hospitalizado, por lo que no generó los gastos que la parte demandante dice haber sufrido. La misma imprecisión se presenta en los conceptos de viajes, alimentación y medicamentos, los que deben ser precisados y en su momento probados, para poder entender a qué se refiere con estos gastos y cuál finalmente es el monto a precisar para cubrirlos en caso de existir, ya que la amplitud de estos no permiten encasillarlos en una situación determinada. Por ejemplo, a qué se refiere con medicamentos, qué clase, para cuál de los demandantes y por qué se encuentran relacionados con esta causa.

En cuanto a los gastos mortuorios, es la misma demandante la que menciona la palabra “anticipada”, para referirse a la compra de la sepultura de don Oscar Epulef. La muerte es un hecho inevitable, que tarde o temprano nos llegará a todos, y presume que por lo mismo la contraria ha utilizado esta palabra, ya que lamentablemente en este accidente hubo un fallecido, que partió antes y por ese motivo su familia se hizo cargo de los gastos funerarios en ese momento. Si en el mismo accidente hubiese muerto su representado, su familia se habría hecho cargo de dichos gastos, sin embargo al no haber ocurrido esto, los gastos mortuorios siguen pendientes pero no para siempre, ya que la muerte llegará en algún momento, por lo que al ser la muerte un hecho inevitable, los gastos que estas trae aparejada también lo son.

Por último, expone que hoy en día nuestra legislación contempla, en la Ley N° 18.490, el SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES CAUSADOS POR VEHÍCULOS MOTORIZADOS (SOAP), mediante el cual se le exige a todo vehículo motorizado para transitar por las vías públicas del territorio nacional, un permiso de circulación al cual deberá estar asegurado contra el riesgo de accidentes personales, bajo apercibimiento de sanciones que la misma ley establece. Es esta misma la que señala en sus artículos 24 y 25, que EN CASO DE MUERTE, EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES GARANTIZA UNA INDEMNIZACIÓN DE UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A 300 UNIDADES DE FOMENTO, por lo que



**Foja: 1**

es este seguro el que se encarga de cubrir los gastos por hospitalización, atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, implantes, farmacéutica y cualquiera otra que se requiera,

Así, al último día del mes de junio de 2016, la unidad de fomento tenía un valor de \$26.052,07, por lo que la familia de don Oscar Epulef pudo haber cobrado el valor de esta indemnización que, según lo señala la ley, ascendería a la suma de **\$7.815.810** (300 UF), valor que es más del doble de lo que solicita la contraria por concepto de daño emergente, y que si el camión circulaba según la ley, debe haber tenido un seguro vigente. De lo contrario, no corresponde a esta parte hacerse cargo de una indemnización que la ley ya ha contemplado al crear este seguro obligatorio, con el fin de cubrir los gastos que la contraria pide como daño emergente. Además, el artículo 31 del mismo cuerpo legal, dispone que en caso de muerte, serán beneficiarias del seguro las personas que se señalan, en orden de precedencia: cónyuge, que en este caso no existe; hijos menores de edad legítimos, naturales o adoptivos, por lo que correspondería a Martín Epulef Contreras cobrarlo, que excluye a los demás hijos.

Es por todo lo anterior, que la petición de las partes ha sido excesiva, y en caso de haber cobrado el Seguro Obligatorio, han querido enriquecerse dos veces por un mismo hecho, tanto por el cobro del seguro como solicitando a al Tribunal se condene a su representado por daño emergente.

**2.3.2. LUCRO CESANTE.** La parte demandante solicita una indemnización por lucro cesante, de \$78.000.000, argumentando que don Oscar Epulef percibía ingresos por \$6.000.000 anuales, de manera que su familia y su “viuda” han dejado de percibir dicha suma.

Entendiendo el lucro cesante como la utilidad que en virtud del daño se ha dejado de percibir, el núcleo cercano del fallecido que ha sufrido este supuesto detrimento estaba compuesto por **ERIKA DEL PILAR CONTRERAS PEREIRA**, denominada “viuda”, **FABIOLA ANDREA EPULEF CONTRERAS**, hija y **MARTIN ALEJANDRO EPULEF CONTRERAS**, hijo.

En cuanto a doña Fabiola Epulef, según consta en su certificado de nacimiento, su fecha de nacimiento es el 17 de septiembre de 1988, por lo que su actual edad es 28 años. Tal como ella misma lo señala en su individualización del escrito de demanda, se desempeña como Administrativa, por lo que en la actualidad cuenta con una remuneración que permite concluir que es independiente económicamente, de manera que tal daño no le afectaría de manera directa.

En segundo lugar, la “viuda” del fallecido, doña Erika Contreras, no tiene tal calidad respecto a don Oscar Epulef, ya que el vínculo matrimonial actual se encuentra terminado. Por lo tanto, a ella no le afecta el supuesto perjuicio producido por lucro cesante, ya que en la actualidad no existe vínculo de matrimonio entre ambos que pueda justificar que seguía percibiendo ingresos de parte de don Oscar Epulef.

En el caso de Martín Epulef Contreras, el hijo menor del fallecido junto con doña Erika Contreras, de actuales 10 años, es la única víctima que podría solicitar lucro cesante, ya que por su edad, ha dejado de percibir ingresos de su padre, ya sea por pensión de alimentos o voluntarios. Sin embargo, los gastos de los hijos deben ser cubiertos por partes iguales por el padre y la madre, de manera que la muerte de don Oscar Epulef no significa que el menor quede en la indefensión económica, ya que tiene a su madre, que le corresponde asegurar su manutención. Por otro lado, hay que tomar en consideración que según el certificado de afiliación a AFP, don Oscar Epulef cotizaba en AFP Plan Vital desde el año 2009, y seguramente por su edad y su trayectoria como trabajador, antes de esta entidad había ya cotizado en otras, de manera que a su fallecimiento, los fondos se pagan a través de pensiones de sobrevivencia a sus beneficiarios. En este caso, sería su hijo menor al que le correspondería el cobro de dichos montos, ya que no hay cónyuge, y por orden de prelación siguen los hijos menores de 18 años.

Así, el daño emergente al que aluden las partes en su demanda no sería tal como lo señalan, porque primero, no han acreditado que lo que generaba como ingresos el fallecido es efectivamente la suma que han señalado (6.000.000 anuales), y segundo, han ocultado esta suma por cobro de montos de AFP, en caso de haberlos cobrado, ya que este es un derecho que se encuentra vigente y que los hijos deben cobrar al momento de la muerte del cotizante.



Foja: 1

**2.3.3. DAÑO MORAL.** La parte demandante solicita la suma de \$200.000.000 por concepto de daño moral, argumentando que *“para su mujer, Erika del Pilar Contreras Pereira, el perder al compañero de más de 30 años de vida juntos, a aquel junto a quien se espera vivir los últimos días del matrimonio, con quien naturalmente se debería envejecer, a quien debió observar la forma trágica de su muerte, no tiene parangón. Queda sola, sin más apoyo que sus hijos y nietos, sin la persona que además de ser su compañero, el padre de sus hijos, era su sostén económico de una familia”*.

Concuerda que la muerte de una persona cercana es lamentable y doloroso, además si se tiene un vínculo amoroso y de matrimonio, siempre y cuando este vínculo exista entre las partes.

Dentro de las características del matrimonio que señala el artículo 102 del Código Civil, nos encontramos con que es un contrato que es indisoluble y para toda la vida, pero la ley N° 19.947 establece sus causales de terminación de manera taxativa. Una de estas causales, es la sentencia firme de divorcio, entendiéndose que el divorcio pone término al matrimonio (Art. 53 de la misma ley). Todo lo señalado tiene significación en esta causa, específicamente en lo que piden las partes por daño moral, ya que su argumento se basa en la relación de matrimonio existente entre el fallecido y su “esposa”, relación que NO EXISTE EN LA ACTUALIDAD, ya que se encuentran DIVORCIADOS por sentencia del Juzgado de Familia de Constitución de fecha 19 de Mayo de 2015, causa ROL C-247-2015. Entonces, cómo es posible que la parte demandante señale claramente y tal como cita, que es su esposa la que ha sufrido las mayores consecuencias emocionales de la muerte de don Oscar Epulef, con el cual esperaba vivir sus últimos días de matrimonio, si el matrimonio se encontraba terminado desde el año 2015. Es posible preguntarse entonces, cual es la finalidad de la parte demandante, arguyendo un hecho que es derechamente FALSO como argumento para justificar la suma de \$200.000.000 y además, en la demanda ni siquiera se señala el domicilio de doña Erika Contreras.

Nuestro derecho contempla el principio general del ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, entendido como el enriquecimiento de un sujeto en detrimento de otro, teniendo como base una causa ilícita o inexistente. En este caso, la parte demandante pretende engañar al Tribunal, basando su argumento de daño moral sobre un hecho que es DERECHAMENTE FALSO, como es el vínculo matrimonial entre doña Erika Contreras y don Oscar Epulef, pretendiendo a través de este engaño, obtener una indemnización por daño moral para así enriquecer su patrimonio teniendo como base un hecho que carece de veracidad.

En cuanto a los hijos, la contraria señala como argumento para justificar \$200.000.000 de daño moral, que don Oscar Epulef, *“había logrado formar una pequeña fortuna suficiente para mantener una familia”*. Sin embargo a esta parte le parece que esos dichos ya se encuentran contenidos en el ítem de lucro cesante, ya que están pidiendo \$78.000.000 por concepto de este daño, estableciendo que su padre no los podrá seguir manteniendo, pero la esposa no tiene tal calidad, ya que se encuentran divorciados, de una hija que tiene 28 años y trabaja como administrativa y efectivamente de un menor de edad que ha perdido a su padre, pero que tiene a su madre para recibir su apoyo. En este caso al apoyo económico que la parte demandante está aludiendo, ya que tanto en el daño moral como en el lucro cesante, han utilizado los mismos argumentos para justificar las altas sumas que están solicitando pagar a esta parte en caso de condena.

Su representado no duda del dolor que siente la familia del fallecido en este terrible accidente, empatiza con ellos comprendiendo que para él ha sido muy difícil este transitar luego del hecho ocurrido, ya que su vida jamás será la misma, por este motivo es que comprende que el dolor que está sintiendo hoy en día la familia de don Oscar Epulef no tiene comparación, sin embargo el hecho de la muerte no es una justificación para que su familia solicite el pago de un monto indemnizatorio que escapa de toda lógica, a través del cual pretenden enriquecerse sin una causa real y lícita, basando sus argumentos en hechos falsos y engañosos.



Foja: 1

**2.4. PRESUNCION DE INOCENCIA EN SEDE PENAL.** La contraria en la relación de los hechos, señala que su representado en la actualidad está siendo investigado en sede penal por la Fiscalía de Licantén, en causa RIT 427-2016, por la cual fue efectivamente formalizado con fecha 25 de octubre de 2016. Sin embargo, la formalización sólo implica una comunicación del fiscal al imputado, de que actualmente se está realizando una investigación en su contra, PERO EN NINGUN CASO EL HECHO DE LA FORMALIZACIÓN IMPLICA CULPABILIDAD, por lo que al contrario de lo que han querido demostrar con la relación de los hechos, su representado aun cuenta con la presunción de inocencia a su favor. No existe una sentencia que condene a don Elías Miranda por el delito que es investigado, de manera que accionar por daños civiles en esta etapa es intentar atribuirle una responsabilidad que aún no está determinada, puesto que es de suma importancia establecer la causa del accidente, que bien pudo ser la falta de visibilidad, condiciones climáticas, causa de señalética por la empresa concesionaria e incluso un exceso de velocidad del camión que conducía don Oscar Epulef. Ninguna de ella se encuentra aún determinada en sede penal, por lo mismo su representado tiene a su favor el principio básico que es la presunción de inocencia. Además, cabe señalar que el demandado ejerce el oficio de chofer de buses desde hace más de 15 años, con su licencia clase A3-A4, obtenida en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Hualañé, actualmente vigente hasta el 31 de octubre de 2017, tiempo durante el cual jamás se vio involucrado en ningún tipo de accidente, ni siquiera el más mínimo, ya que la prudencia y la calma al conducir es y será siempre una de sus características como chofer, además de no beber alcohol desde hace más de 30 años, ya que por motivos de salud, como lo es la diabetes tipo 2 de la que sufre, ha elegido llevar una vida alejada del alcohol y de aquello que pueda empeorar su enfermedad (la alcoholemia el día del accidente dio 0.00% gramos de alcohol en la sangre). Por otro lado, durante todo el tiempo que ejerció en este oficio jamás se le cursó ni un parte por ningún motivo, y el bus que conducía al momento del accidente se encontraba con toda su documentación al día, por lo que desea dejar en claro que la prudencia en la conducción y las medidas de seguridad al momento de ejercer su trabajo estaban absolutamente tomadas. Su representado tiene claro que al ejercer el oficio de chofer de bus o camión, se expone a un riesgo que no tienen otras profesiones y oficios, de manera que se atenúa la responsabilidad en caso de accidente, ya que todos los que ejercen este oficio están ciertos que su riesgo es mucho mayor al recorrer día tras día carreteras y caminos en diferentes condiciones.

**2.5. FALTA DE CAPACIDAD ECONOMICA PARA RESPONDER Y DAÑOS PROVOCADOS A SU REPRESENTADO POR EL ACCIDENTE.** Expone que su representado, no cuenta con la capacidad económica para responder a la altísima suma de indemnización que la contraria exige se le condene. Sin ir más lejos, en el Certificado de Cotizaciones Previsionales que acompaña se puede ver claramente que la remuneración imponible es de \$250.000, hasta la actualidad. Don Elías durante toda su vida ha sido un hombre de mucho esfuerzo, que ha sacado adelante a su familia a través de su trabajo y el de su esposa, por eso no pretende engañar al Tribunal, escondiendo bienes o remuneraciones que este pueda tener, sino mostrándolo tal cual es; un hombre trabajador, de esfuerzo, de clase media-baja, prudente en su trabajo, que lamentablemente se vio envuelto en este accidente que le ha cambiado la vida de manera absoluta.

Hasta antes de estos hechos, don Elías era una persona por completo independiente, con una enfermedad de base como es la diabetes, que la tiene controlada gracias a cumplir su tratamiento al pie de la letra. Una vez que este accidente se produce, tuvo un giro negativo ya que sufrió graves fracturas que aún no tiene claro si le van a permitir volver algún día a trabajar y retomar su vida de antes, ya que hoy se encuentra aun con una cojera que no le permite manejar. El mismo día del accidente, don Elías fue trasladado al Hospital de Curicó, en el cual, por la gravedad de sus lesiones fue operado de la multifractura de cadera y fractura de tibia y peroné en un lapso de tres días. Fue dado de alta después de una semana de hospitalización, sin poder caminar y por ende no hacer ninguna actividad de manera independiente, quedando al cuidado de su esposa y su hija durante el





**Foja: 1**

siguiente mes, luego del cual recién pudo sentarse en la cama, por la grave lesión que sufrió en la cadera que no se lo permitía hasta ese momento.

Los primeros tres meses posteriores al accidente fueron de total dependencia. No se podía bañar, hacer sus necesidades básicas, caminar, comer por sí sólo. Luego de ello, de a poco y con mucho esfuerzo, comenzó su rehabilitación, tanto física como psicológica, ya que los golpes y las fracturas irán pasado, pero el dolor que le ha provocado este terrible episodio en su vida quedará para siempre. Existe al día de hoy una disminución de su capacidad laboral, ya que físicamente no puede ejercer el trabajo que ejercía antes y además, durante los cinco primeros meses desde el accidente, no le fueron pagadas sus licencias médicas por accidente laboral, por lo que durante todo ese tiempo tuvieron que vivir de los aportes de su familia y de la remuneración de esposa, que bordea los \$300.000 mensuales, siendo muy difícil cubrir los gastos que esto ha implicado, como viajes a los controles en bus, ya que no cuentan con automóvil, además de que su cónyuge tuvo que pedir tres meses de licencia en su trabajo, para cuidar de don Elías por encontrarse éste en absoluta incapacidad.

Su representado es una persona que empatiza absolutamente con el dolor de la familia de don Oscar Epulef, ya que por lo fuerte que fue, tiene claro que él también pudo haber fallecido en este accidente, sin embargo sostiene que las circunstancias que rodearon este terrible hecho fueron las que confluieron para que se produjera, y que él, al tomar todas las medidas necesarias para evitarlo, no tiene responsabilidad alguna. Jamás, en ningún caso, ha querido no darle importancia a lo que sucedió, ya que es algo que ha marcado su vida, y al ponerse en el lugar de la familia que sufrió la pérdida de un ser querido, sus hijos se encuentran habilitados en derecho para iniciar una acción por este hecho, pero su representado simplemente no tiene la capacidad económica para responder por la suma de \$281.000.000 que pide la familia del fallecido.

Por todo lo anterior solicita se tenga por contestada la demanda, y en definitiva la rechace en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A folio 20, con fecha 18 de febrero de 2017, la parte demandada de don **OSCAR MAURICIO INZULZA SALGADO**, contesta demanda, solicitando el total rechazo de la misma, con expresa condenación en costas, por falta de argumentos de hecho y fundamento derecho, que pasa a exponer:

**I. Negación Genérica.** Se niegan, en general, los hechos en la forma que se presentan en la demanda, siendo –en consecuencia– improcedentes las razones de índole jurídica señaladas por la contraria, en relación con tales antecedentes fácticos.

**II. En Cuanto al hecho en que se funda la responsabilidad extra-contractual y su relación con el principio de la congruencia.** En este punto, útil resulta tener en consideración lo siguiente: a) Los requisitos o elementos de la responsabilidad extracontractual, y b) El principio de la congruencia, como marco regulador o limitativo de la actividad jurisdiccional. En cuanto a lo primero, tal como han fallado reiteradamente nuestros Tribunales: “(...) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, para que tenga lugar la responsabilidad extra-contractual es menester la existencia de un hecho doloso o culposo, perjuicios y el nexo causal entre ambos.” Ratificando lo anterior, desde la óptica doctrinaria, se ha sostenido que los requisitos o, si se prefiere, elementos de la responsabilidad extra-contractual o también denominada “ilícita civil”, son las siguientes: “(...) (i) El hecho voluntario; (ii) La culpa o ilicitud; (iii) El daño y (i) La causalidad o relación causal (...)”. Ahora bien, como igualmente se ha sostenido –tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario– los requisitos de la responsabilidad extra-contractual deben concurrir conjuntamente, de forma tal que la falta o ausencia de cualquiera de ellos obsta a que la pretensión pueda ser acogida. En cuanto a lo segundo, la “congruencia” constituye un principio –de índole procesal– que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, al mismo tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos del procedimiento



**Foja: 1**

que componen el proceso. De esta forma, el principio de análisis se traduce en que: “(...) el derecho aplicable debe enlazarse a las acciones y excepciones, alegaciones y defensas que las partes han sostenido en el pleito (...)” (C. Suprema, sentencia de 26 de agosto del año 2010, Rol número 2283–2009. Por cuanto “(...) la sentencia debe estar conforme con la reclamación escrita, para que el juez no vaya más allá, fuera o más acá de las demandas de las partes; tanto lo imputado como lo sentenciado, el juez debe juzgar de acuerdo con las razones alegadas y probadas por las partes.” Por lo mismo, la libertad del juez para interpretar y aplicar el derecho ha de circunscribirse a los dictados del principio en alusión, el cual le otorga el marco de su contenido. Teniendo en cuenta todo lo hasta ahora, resulta, por un lado, que la acción que se impute al demandado constituye uno de los requisitos de la responsabilidad ilícita civil y, por el otro, a esa acción “y sólo a esa” deberá estarse el órgano resolutor para los efectos de determinar la procedencia del reproche indemnizatorio. En mérito del relato anterior que, como se advierte, fija el supuesto hecho generador de la responsabilidad o, lo que es igual, la conducta ilícita, forzoso resulta concluir que para que pueda accederse a la pretensión indemnizatoria corresponderá a la demandante demostrar la efectividad de ese –como lo denomina– “hecho detonante”. De forma tal que en caso de no acreditarse las circunstancias anteriores (es decir, que en la fecha indicada en la demanda se produjo el hecho que ya describimos) el sentenciador se encuentra impedido de acceder al reproche indemnizatorio, bajo sanción que –de hacerlo– se infringiría el ya analizado principio de la congruencia procesal.

**III. Existencia de un cuasi delito establecido por sentencia judicial ejecutoriada para que exista responsabilidad.** En primer término, se debe considerar que al momento de interponer la parte contraria la demanda de autos y de su notificación a don Elías Nataniel Miranda Carvajal, este no ha sido condenado mediante sentencia judicial ejecutoriada como autor de cuasidelito de homicidio alguno, sólo existe una investigación seguida en causa RIT N° 427–2016 por el Ministerio Público de Licantén ante el Juzgado de Letras y Garantía de Licantén, por el accidente ocurrido con fecha 07 de junio del 2016, es decir, no se ha dictado resolución judicial alguna a la fecha que se pronuncie sobre las circunstancias del accidente investigado de suerte tal que deberá acreditarse en el litigio de autos no solo los supuestos perjuicios sino que además deberá acreditarse que tal perjuicio es imputable al chofer del bus como consecuencia del accidente y que tal perjuicio es culpable o responsable civilmente dicho conductor. Por otra parte se debe considerar que si bien es verdad que con fecha 07 de junio del año 2016, el bus conducido por don Elías Nataniel Miranda Carvajal, de propiedad de don Oscar Mauricio Inzulza Salgado, participó en una colisión la cual a la fecha es investigada por la Fiscalía Local de Licantén, ello no quiere decir que su mandante tenga responsabilidad solidaria que singulariza en la demanda de un ilícito penal; consistente específicamente en que el chofer del bus sería autor del cuasidelito de homicidio, olvidando la parte contraria lo establecido en el principio de “presunción de inocencia” establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal y además lo establecido en el artículo 166 de la Ley N° 18.290 que establece: “El mero hecho de una infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido por el accidente. En consecuencia, si una persona infringe alguna disposición y tal contravención no ha sido causa determinante de los daños producidos, no estará obligada a la indemnización.” Lo anterior se desprende de manera notoria tanto del cuerpo de la demanda, como por ejemplo con lo señalado en los antecedentes de su pretensión. Siendo así, para que nazca la responsabilidad en este caso, refleja respecto de quien representa, se necesita de la existencia de ese cuasidelito penal. En otras palabras, desde el prisma jurídico, se requiere la certeza judicial de haberse incurrido en el ilícito criminal que justifica el reproche indemnizatorio. Por lo mismo, si tal certeza no existe, se encontrarán ante un caso de ausencia o falta de la fuente de responsabilidad que, como tal, obsta a que la pretensión pueda ser acogida. En cuanto a lo que denomina la necesidad de establecer la responsabilidad personal del conductor para que nazca la responsabilidad solidaria del tercero civilmente responsable, que si bien el inciso 2 del artículo 169 de Ley de Tránsito consagra la



**Foja: 1**

responsabilidad solidaria tanto del propietario como del tenedor con el conductor del vehículo respecto de los daños que se ocasionaron como consecuencia del uso del mismo, la demanda civil no puede acogerse por no cumplirse en la especie con el presupuesto fundamental de toda demanda dirigida a obtener la responsabilidad de un tercero civil, esto es la culpabilidad o responsabilidad personal del conductor del vehículo que haría nacer la responsabilidad solidaria, ya del propietario, ya del tenedor. En efecto, precisa que ni la dinámica, ni la causa del accidente y menos la responsabilidad personal del conductor se han establecido por sentencia judicial ejecutoriada, por lo que no puede concluirse que el conductor del bus don Elías Nataniel Miranda Carvajal conducía desatento a las condiciones del tránsito, y menos que habría perdido el control de tal vehículo, sobrepasando el eje central de la calzada para colisionar al camión placa patente única UW – 4464, y como consecuencia de ello se ocasionó el fallecimiento de su conductor don Oscar Humberto Epulef Salas, motivo por el cual debe ser rechazada en todas sus partes la demanda de autos. Sin perjuicio de lo dicho, ahora desde el prisma netamente fáctico o material, la demanda indemnizatoria se funda o sustenta en hechos que no son ciertos y, en consecuencia, impiden que se encuentren en la especie, ante la concatenación exigida a fin de acceder al reclamo de perjuicios. La acción contraria parte de un hecho principal, como se desprende de lo expresado en la demanda, consistente en que: Con fecha 07 de junio de 2106, don Oscar Humberto Epulef Salas, conducía un camión placa patente única UW– 4464, en dirección hacia el norte por la ruta J–60 y en sentido contrario lo hacía el Bus placa patente única UF – 6177, marca Mercedes Benz, modelo OF172159, conducido por el demandado principal don Elías Nataniel Miranda Carvajal según consta del relato del personal aprehensor que participó en el accidente y además de testigos presenciales del mismo accidente, señalando que el bus era conducido en forma zigzagueante por parte del demandado Miranda Carvajal, impactando previamente a otro camión, ocasionándole daños a su espejo izquierdo, pero posterior a eso, chocar un furgón y después haber colisionado dos veces, impactar casi de frente al camión que era conducido por don Oscar Humberto Epulef Salas, resultando fallecido y el camión completamente dañado, todo eso se encuentra en la etapa de investigación por parte de la Fiscalía Local de Licantén en causa RUC N° 1610039196–5, cuya formalización se realizó el día 25 de octubre de 2016 en causa RIT N° 427–2016. Frente a lo establecido precedentemente por la parte contraria, se debe considerar al respecto, en primer lugar que su mandante don Oscar Mauricio Inzulza Salgado carece de todo tipo de responsabilidad y no es posible aplicar la norma del artículo 2330 del Código Civil, puesto que a pesar de haber empleado toda autoridad y cuidado respecto de su dependiente, no pudo impedir el hecho, puesto que no se encontraba al momento del accidente bajo su vigilancia, y se cumplía con la Ley al no exceder los límites de velocidad y conducir atento a las condiciones del tránsito, y el chofer había cumplido con las horas de descansos correspondientes. Por otra parte se debe tener presente en lo que dice al lugar del accidente: No existe responsabilidad alguna por parte del conductor del bus como tampoco de su representado, por cuanto la Ruta J–60 no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N° 18.290 ya que no se encontraba debidamente delimitada el eje de la calzada, como tampoco existía señalética alguna y menos alumbrado que estableciera peligro en dicha ruta considerando para ello las condiciones del tiempo y las reparaciones que se estaban realizando a dicha ruta, por cuanto los encargados de mantener y reparar dicha ruta no cumplieron con la obligación de proporcionar las condiciones de seguridad en el transito del mismo la cual debe ser tranquila y sin riesgos. Seguidamente se debe tener presente que el Sr. Miranda Carvajal, conducía a una velocidad razonable y prudente y más aún atento a las condiciones del tránsito, por lo que el conductor del bus no iba a exceso de velocidad, sin que exista ningún antecedente en autos que avale esa tan liviana aseveración señalada por la parte contraria; iba por el contrario atento a las condiciones del tránsito, sin que en modo alguno pudiera proveerse la conducta descuidada y negligente de quien ahora se presenta como demandante, motivo por el cual debe ser rechazada en todas sus partes la demanda de autos



Foja: 1

**IV. En Cuanto a los perjuicios.** Directamente relacionado con lo anterior, no puede perderse de vista que la responsabilidad refleja, según ya lo han denominado o también conocida por hecho ajeno, no es objetiva, desde el momento en que se requiera de la concurrencia o, más bien, comprobación de todo los elementos de la responsabilidad aquiliana, principalmente en lo que respecta a su fase subjetiva, en el sujeto por quien eventualmente se responde. De forma tal, que si tal comprobación íntegra no se presenta no es posible pretender alcanzarse con la acción indemnizatoria a quién no ha tenido una intervención directa en el o los hechos punitivos que fundan la acción. En lo que respecta a los perjuicios, en mérito de todo lo expuesto niegan tanto su procedencia como el monto en que se cuantifican por parte de la actora. En este sentido, la parte demandante pretende el pago por concepto de; Daño Emergente, Lucro Cesante y Daño Moral, la suma total de \$ 281.000.000. En primer término se debe considerar que doña Erika del Pilar Contreras Pereira, no tiene legitimación activa para litigar en autos por cuanto de acuerdo certificado de matrimonio que acompañado en autos ella se encuentra divorciada de don Oscar Humberto Epulef Salas y quien por lo demás retiró la demanda como cónyuge, por lo que no tiene derecho a percibir indemnización de los perjuicios reclamados como son el daño emergente, el lucro cesante y menos aún el año moral.

**A. Daño Emergente.** La parte demandante solicita que se condene a los demandados por daño emergente a la suma de \$3.000.000 por concepto de hospitalización, de don Oscar Humberto Epulef Salas, viajes, alimentación, medicamentos y la compra anticipada de la sepultura. Partiendo del supuesto que éste implica una disminución efectiva en el patrimonio de la víctima, se requiere de una determinación o especificación tal que permita al sujeto pasivo de la acción y, fundamentalmente, el órgano resolutor la efectiva, determinación de haberse disminuido el patrimonio de la demandante con motivo de la comisión del ilícito penal. Con total evidencia, los términos que en esta parte se contienen en la demanda, no cumplen con el estándar de determinación o especificación ya enunciado. Ahora bien en cuanto lo que dice relación con lo solicitado por la parte demandante debe ser rechazado íntegramente por cuanto ya se encuentra cubierto, ya que nuestro ordenamiento jurídico establece el seguro obligatorio de accidentes causados por vehículo motorizado regulado en la Ley N° 18.490, con la finalidad de cubrir riesgos de accidentes de tránsito, teniendo presente que en el N° 4 del artículo 25 de la ley singularizada, establece el seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados, garantiza una indemnización en una cantidad equivalente de hasta 300 unidades de fomento por concepto de gastos de hospitalización o de atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, implantes, farmacéutica y cualquiera otra que se requiera para su rehabilitación. Estas 300 unidades de fomento se destinarán sólo al pago o copago de los gastos señalados precedentemente, y además el artículo 31 de la misma ley dispone que en caso de muerte las personas beneficiadas con dicho seguro, por lo que no procede el daño reclamado por parte de la demandante.

**Lucro Cesante:** La parte demandante solicita que se condene a los demandados por lucro cesante la suma de \$78.000.000, por cuanto don Oscar Humberto Epulef Salas, generaba recursos (utilidades) para su familia, por lo menos por \$6.000.000 anuales en base solo a su renta mensual considerando solo los trece años que le quedaban más de vida laboral útil, su familia, su viuda, ha dejado de percibir por lo menos \$ 78.000.000. El monto solicitado por la parte demandante debe ser rechazado por cuanto su viuda doña Erika del Pilar Contreras Pereira, no tiene derecho alguno a los perjuicios reclamados, tal como se expuso precedentemente por cuanto ella se encontraba divorciada don Oscar Humberto Epulef Salas y en cuanto a su hija Fabiola Epulef Contreras, mayor de edad, tampoco tiene derecho alguno por cuanto ella es una persona que a la fecha se encuentra trabajando y por lo mismo no puede buscar a través del presente juicio un enriquecimiento injusto. En relación al menor Martín Epulef Contreras el monto solicitado no puede ser tan elevado y debe ser regulado por parámetros fijados por los tribunales de justicia, por cuanto su representado no puede asumir la educación y crianza del menor ya que es una obligación de ambos padres, debiendo



**Foja: 1**

considerarse que don Oscar Humberto Epulef Salas, al ser trabajador el debió tener seguro y/o su AFP cubrir las necesidades del menor Martín.

**En Cuando al Daño Moral:** El análisis de este reclamo indemnizatorio, lleva –a su vez– a tratar las siguientes situaciones: 1) **Prueba del daño moral.** Quien alega existencia de este daño, de carácter extramatrimonial, deberá acreditar no sólo el origen o causa de las supuestas aflicciones que componen esa especie de daño, sino también la existencia de las mismas. Por lo anterior, es que nuestros tribunales han puesto especial énfasis en la rigurosidad de la determinación del daño moral por parte de quien lo reclama, no siendo suficiente, para tales fines, una descripción genérica de los eventuales perjuicios que se hubieran provocado. En consecuencia, de los términos absolutamente genéricos que se utilizan en la descripción de los supuestos daños sufridos, resulta evidente que no se alcanza el estándar de rigurosidad exigido para la procedencia –también– de esa parte de su reclamo. Al respecto se debe considerar lo establecido en el artículo 2330 del Código Civil, el cual establece que: “La apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. En lo que respecta al quantum indemnización. Si duda que, no obstante la improcedencia de su petición, según lo ya analizado, resulta del todo desproporcionado una pretensión de la magnitud ya señalada (esto es, \$200.000.000); situándonos en la figura conocida como la “mercantilización del derecho de daños” en donde se usa (más bien, se abusa) de la herramienta jurídica para pretender obtener el pago de sumas que no corresponden y que, de accederse a ellas, nos llevaría –a su vez– a un enriquecimiento sin causa, cuyo sólo enunciado hace que se rechacen ese tipo de peticiones. No obstante lo anterior y siempre dentro del ámbito del quantum indemnizatorio, resulta interesante hacer hincapié en los perjuicios que se dice haberles provocado. Planteado así el reclamo de la actora, nos coloca ante la necesaria diferencia (que cada vez va adquiriendo más fuerza doctrinaria) entre el daño moral y el daño psicológico, entendiéndose por éste último “ (...) la perturbación transitorio o permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológico, producida por un hecho ilícito, que genera en quien padece la posibilidad de reclamar una indemnización por tal concepto a quien la haya ocasionado o deba responder por ella” (Daray, Hernán “Daño psicológico” p. 16): Siguiendo esta tendencia “(..) no corresponde confundir afecciones que configuran el daño moral con las del daño psicológico, ya que si bien en ambos casos se afecta el equilibrio espiritual de la persona dañada, el daño psicológico reviste connotaciones de índole patológico, es decir, constituyen una enfermedad y, por tanto, es diagnosticable a través de la ciencia médica” (Dos Santos M.J.A. “Aspectos importantes de la indemnización por daño moral”. Ahora bien, esta diferenciación presenta –a su vez– radicales diferencias en cuanto a la cuantía indemnizatoria, por cuanto en el caso del daño psicológico, dicha cuantificación gira en torno a los gastos psicológicos realizados por el agente dañado para hacer desaparecer las secuelas síquicas del hecho ilícito. Así las cosas y sólo ateniéndonos a los dichos de la contraria, resulta claro que en el evento improbable que se acceda a la indemnización por concepto de daño moral, el resarcimiento pretendido debe decir directa relación con los gastos en que se hubiera incurrido para subsanar las consecuencias patológicas denunciadas (siempre –obviamente– que a su vez demuestre el desembolso por tales gastos). Finalmente se debe considerar que: El resarcimiento del daño moral no puede prestarse a especulaciones, a servir de seguro de vida, ser fuente de enriquecimiento sin causa. Teniendo presente además que la indemnización del daño moral no tiene el carácter de reparatorio, por que el pago de una indemnización no borra el daño. Si el hecho que causa la muerte de un hijo, padre, conviviente o hermano no es posible volver a la situación anterior. Sólo cumple una finalidad satisfactoria en el sentido que gracias al dinero, el que recibe puede preocuparse satisfacciones materiales o espirituales.

**V. Por último, en lo que dice relación con los reajustes e intereses.** Ello porque en el petitorio de la demanda se pretende el pago de las eventuales indemnizaciones con más reajustes e intereses hasta la fecha de su pago efectivo. Púes bien, en el evento improbable que se acceda a la demanda, tales reajustes e intereses, en el caso de estimarse que corresponde su pago, sólo podrá abarcar el



**Foja: 1**

periodo comprendido entre la fecha en que pudiera quedar ejecutoriada la sentencia favorable para la demandante y la del pago efectivo; por cuanto antes de la ejecutoriada referida, tal como se ha sostenido por nuestros Tribunales, sólo existe una mera expectativa que requiere de una sentencia declarativa.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, disposiciones citadas y lo señalado en los artículos 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, solicita tener por evacuado el traslado conferido para contestar la demanda de indemnización de perjuicios y, en definitiva, se rechaza la aludida demanda, en todas sus partes por falta de argumentos de hecho y fundamentos de derecho, con costas de la causa.

A folio 22, con fecha 22 de febrero de 2017, la demandante estando dentro de plazo, viene en evacuar la **Réplica** concedida en autos al tenor de lo que se expone:

a). En primer lugar concuerda plenamente con el principio de congruencia que ha detallado el demandado Oscar Inzulza, toda vez que dado el relato de la demanda, el cual es concordante con los hechos descritos tanto en el parte policial del cual es parte la investigación penal, como así mismo de las propias declaraciones del conductor. Por lo que los hechos han sido descritos de las formas que han ocurrido.

b). El demandante yerra en su aseveración principal en pedir una sentencia ejecutoriada para efecto de que proceda la responsabilidad como así mismo la obligación de indemnizar confundiendo los conceptos establecidos en el Código Civil con los principios citados de la ley 18.290. En principio el artículo 2314 establece que quien ha cometido un delito o cuasidelito que a inferido daño a otra está obligado a repararlo. Sin perjuicio de la pena que tenga asignada el delito o el cuasi delito. Que quiere decir la norma, que independiente del reproche penal que tiene asociada la conducta, existiendo el daño, debe repararse, o de lo contrario plantea el demandado, que si el señor Elías conductor del bus, accede a una suspensión condicional, o a una salida alternativa, distinta de una sentencia, extingue la responsabilidad del propietario, se equivoca, más aun cuando la norma del artículo 169 de la ley 18.290 es clara y señala: *"De las Infracciones a los preceptos del tránsito será responsable el conductor del Vehículo." El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad con la legislación vigente.*–

En ninguna parte de la cita anterior se solicita que dicha responsabilidad este determinada por sentencia judicial ejecutoriada, para que opere la solidaridad demandada, toda vez que dicha solidaridad emana del vínculo entre propietario y conductor e incluso de un mero tenedor, la única solicitud que hace el legislador es que esta no haya sido contra su voluntad, caso en el cual no nos encontramos, por lo tanto se equivoca en su planteamiento el demandado, dado que su responsabilidad nace en que el conductor lo hizo sin estar atento a las condiciones del tránsito, sino como podrá explicar que chocó a un camión tres cuartos destrozándole su pick-up y también chocó a otro camión, sacándole su espejo izquierdo, para posterior a eso y siguiendo su marcha, chocó de frente con el conductor del camión, a quien producto del impacto mató, o será que iba despacio, será que no pensó en detenerse, claramente fue una conducta imprudente, la cual vulneró las normas de tránsito, lo que hace que el chofer sea formalizado por su responsabilidad, de allí nace la solidaridad del dueño del bus, no de la sentencia que pide el demandado.–

C). En cuanto a los perjuicios se remite a lo planteado en la demanda, con la corrección de la demandante Erika, su ex señora, en todo lo demás solicita se tenga por reproducido lo planteado en la demanda, a fin de evitar repeticiones innecesarias.–



**Foja: 1**

Que a folio 24, con fecha 1 de marzo de 2017, se evacua la **Dúplica** por la Abogado de la parte demandada **Elías Nataniel Miranda Carvajal**, quien señala que:

1. Según lo que señala el demandante en su escrito de réplica, sus argumentos se remiten en todo momento a dar por sentados ciertos hechos que hoy en día se encuentran en investigación en sede penal, y que son los que han dado pie a la presente causa por indemnización de perjuicios. Tal como lo señaló en el escrito de contestación, le parece del todo irresponsable atribuir una responsabilidad a su representado, que aún no ha sido establecida por ninguna sentencia en ningún Tribunal del país, ya que gracias a la presunción de inocencia que contempla nuestro ordenamiento jurídico, y que se encuentra plenamente vigente en el caso de su representado, debe presumirse la inocencia de toda persona sometida a proceso mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En esta misma línea, considera que al señalar que don Elías Miranda “mató” a don Oscar Epulef, la contraria está haciendo un uso indebido del lenguaje, ya que la investigación ha señalado que el hecho ha sido clasificado como un cuasidelito, sin intención, por lo tanto todo lo que sucedió aquella mañana fue una concatenación de hechos que llevaron a un resultado, y tal como lo afirmaron en la contestación, creen que existen los argumentos suficientes para afirmar que hay muchos elementos que intercedieron en la muerte de don Oscar Epulef, tal como la falta de señalización de la vía, la no demarcación del eje central y las condiciones climáticas del momento.

2. En este mismo sentido, les parece importante citar el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, que señala “En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal, siempre que condenen al procesado”. Así, la parte demandante no tiene una sentencia a su favor, y si bien reconocen su derecho a solicitar la indemnización de perjuicios, la sede civil y la sede penal son dos tipos de responsabilidad que emana de un mismo hecho, pero la declaración de culpabilidad penal no sirve en sí misma como argumento para condenar indefectiblemente a una persona en sede civil. Si bien la sentencia penal es una prueba que puede incluirse en juicio civil como un instrumento, esta no asegura una condena en indemnización, ya que los presupuestos para acreditar la responsabilidad extracontractual son diversos a los de la responsabilidad penal, por lo que la contraria en este caso, está utilizando en sus argumentos hechos que aún no han sido declarados, sino que sólo están siendo investigados, como por ejemplo que su representado no manejaba atento a las condiciones del tránsito y que esa es la causa del accidente que provoca la muerte de don Oscar Epulef, siendo que no existe condena que señale aquello, ni tampoco reconocimiento de responsabilidad de parte de su representado.

3. En cuanto a los perjuicios a los que se refiere la contraria, desea esclarecer que efectivamente doña Erika Contreras ya no forma parte de la demanda por el hecho de su divorcio con don Oscar Epulef, por lo tanto la suma pedida por los demandantes (\$280.000.000), carece de toda lógica, ya que en la demanda su principal argumento son los perjuicios producidos a una víctima que es su supuesta viuda, la cual finalmente no lo es. Por eso, la rebaja de este monto indemnizatorio les parece muy importante, ya que sólo quedarían los hijos de don Oscar: doña Fabiola Epulef, mayor de edad, y Martín Epulef, menor de edad. De todo lo que se refiere a la forma de calcular perjuicios y lo que se debe tomar en consideración, se remiten al escrito de contestación, en donde desarrollan el tema, para no caer en redundancia.

4. En cuanto a todo lo demás que señala la contraria en su réplica, les parece que se ha dedicado a responder principalmente a la contestación del demandado solidario, ya que su discusión se enfrasca en la existencia o no de la responsabilidad solidaria del dueño del bus y empleador de su representado, por lo que para ser congruente con su contestación, no se referirán a aquello, ya que tampoco fue un ítem del cual se refirieron en dicho escrito.

Solicita tener por evacuada la Dúplica y que se rechace la demanda con costas.

Que, a folio 25, con fecha 01 de marzo de 2017, el Abogado de la parte demandada, don **Oscar Mauricio Inzulza Salgado**, don Osvaldo Nicolao Morales, viene en evacuar el traslado conferido para **Duplicar**, dando por íntegramente reproducidos tanto los argumentos de hecho como los



**Foja: 1**

fundamentos señalados al momento de contestar la demanda; así como la petición concreta de total rechazo de la aludida acción, con expresa condena en costas. Sin perjuicio de lo anterior y atendido lo expuesto por la contraria al replicar, surge de manera necesaria realizar las siguientes precisiones:

1).- En dicho escrito se ratifica lo ya advertido al contestar, en cuanto a que la fuente de responsabilidad o, si se quiere, el acto generador de la responsabilidad que se pretende hacer efectiva respecto de su representado, se sitúa por la contraria en la responsabilidad que corresponde al bus conducido por don **ELIAS NATANIEL MIRANDA CARVAJAL** de propiedad de su representado don **OSCAR MAURICIO INZULZA SALGADO**, es decir, un eventual ilícito penal y no civil, específicamente lo sitúa o lo hace consistir en la comisión por parte del otro demandado en cuasidelito de homicidio.-

2).- En base a lo expuesto se debe considerar lo señalado por su parte al contestar la demanda de autos en cuanto que al momento de interponer la parte contraria la demanda y de su notificación a don **ELIAS NATANIEL MIRANDA CARVAJAL**, esté no ha sido condenado mediante sentencia judicial ejecutoriada como autor de cuasidelito de homicidio alguno, solo existe una investigación seguida en causa RIT N° 427-2016 por el Ministerio Público de Licantén ante el Juzgado de Letras y Garantía de Licantén, por un accidente ocurrido con fecha 07 de junio del 2016, es decir, no se ha dictado resolución judicial alguna a la fecha que se pronuncie sobre las circunstancias del accidente investigado de suerte tal que deberá acreditarse en el litigio de autos no solo los supuestos perjuicios sino que deberá además acreditarse que tal perjuicio es imputable al chofer del bus como consecuencia del accidente y que tal perjuicio es culpable o responsable civilmente dicho conductor.-

De acuerdo a lo señalado al haberse trabado la litis de autos don **ELIAS NATANIEL MIRANDA CARVAJAL**, no ha sido condenado mediante sentencia judicial ejecutoriada como autor de cuasidelito de homicidio alguno por lo que no tiene la calidad jurídico procesal de autos de un ilícito que se le imputa en sede civil. Por lo que en esas condiciones y sustentados en el principio de la congruencia, la demanda no puede prosperar.

3).- Se debe considerar que el señor **MIRANDA CARVAJAL**, conducía a una velocidad razonable y prudente y más aún atento a las condiciones del tránsito, por lo que el conductor del bus no iba a exceso de velocidad, sin que exista ningún antecedente en autos que avale esa tan liviana aseveración señalada por la parte contraria; iba, por el contrario atento a las condiciones del tránsito, sin que en modo alguno pudiera proveerse la conducta descuidada y negligente de quien ahora se presenta como demandante, motivo por el cual debe ser rechazada en todas sus partes la demanda de autos.

4).- Por otra parte se debe tener presente que la réplica de la parte contraria no subsana el defecto que hace ver al momento de contestar la demanda, consistente en la total falta de especificación o determinación de las supuestas aflicciones constitutivas del daño moral, como daño emergente y lucro cesante. Omisión que impide que su pretensión, en esta parte también pueda ser acogida.

5).- Finalmente se debe considerar que si bien es verdad que con fecha 07 de junio del año 2016, el bus conducido por don **ELIAS NATANIEL MIRANDA CARVAJAL** de propiedad de su representado don **OSCAR MAURICIO INZULZA SALGADO**, participó en una colisión la cual a la fecha es investigada por la Fiscalía Local de Licantén, ello no quiere decir que su mandante tenga responsabilidad solidaria que singulariza en la demanda de un ilícito penal; consistente específicamente en que el chofer del bus sería autor del cuasidelito de homicidio, olvidando la parte contraria lo establecido en el principio de "presunción de inocencia" establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal y además lo establecido en el artículo 166 de la Ley N° 18.290 que establece:





**Foja: 1**

*"El mero hecho de una infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido por el accidente. En consecuencia, si una persona infringe alguna disposición y tal contravención no ha sido causa determinante de los daños producidos, no estará obligada a la indemnización".*

Solicita en definitiva rechazar la demanda de autos en todas sus partes por falta de argumentos hecho y fundamentos de derecho, con costas.

A folio 98, con fecha 13 de junio de 2018, consta comparendo de Conciliación, el cual no tuvo efecto por inasistencia de la demandada.

A folio 40, con fecha 05 de mayo de 2017, el Tribunal fijó los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos de la causa.

A folio 103 se citó a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que a folio 1, con fecha 06 de diciembre de 2016, comparece doña **Fabiola Andrea Epulef Contreras**, C.I. N° 16.857.079-1, en representación de **Oscar Eduardo Epulef Contreras**, C.I. N° 18.029.068-0 y Erika del Pilar Contreras Pereira, C.I. N° 11.457.280-2 en representación a su vez del menor de edad **Martin Alejandro Epulef Contreras**, C.I. N° 22.029.933-3, todos ya individualizados, quienes deducen demanda de Indemnización de Perjuicios, en contra de don Oscar Mauricio Inzulza Salgado y don Elías Nataniel Miranda Carvajal, con los antecedentes de hecho y de derecho que constan en la misma y que se dan por reproducidos por economía procesal. En cuanto a la réplica, ella fue tenida por evacuada a folio 22, con fecha 22 febrero de 2017.

**SEGUNDO:** Que a folio a folio 11, con fecha 11 de enero de 2017, doña **Ana Belén Saavedra Hernández**, abogada, C.I. N° 16.914.690-k, en representación de don **Elías Nataniel Miranda Carvajal**, C.I. N° 8.236.013-1, ambos ya individualizados, contestando la demanda de Indemnización de Perjuicios con los antecedentes de hecho y de derecho que constan en la misma y que se dan por reproducidos por economía procesal. En cuanto a la réplica, esta fue evacuada a folio 24, con fecha 01 de marzo de 2017, con los antecedentes que constan en aquella y que se dan por reproducidos por economía procesal.

**TERCERO:** A folio 20, con fecha 18 de febrero de 2017, don **Osvaldo Nicolao Morales**, Abogado por la parte demandada don **Oscar Mauricio Inzulza Salgado**, contestando la demanda de Indemnización de Perjuicios con los antecedentes de hecho y de derecho que constan en la misma y que se dan por reproducidos por economía procesal. En cuando a la réplica, esta fue evacuada a folio 25 de fecha 01 de marzo de 2017, con los antecedentes que constan en aquella y que de dan por reproducidos por economía procesal.

**CUARTO:** Que para probar sus pretensiones el demandante rindió la siguiente prueba:

**Documental:**

1.- A folio 1, Certificado de Defunción de don Oscar Humberto Epulef Salas, emanado de Registro Civil e Identificación.



**Foja: 1**

2.- A folio 1, Parte del Ministerio Público (Fiscalía Local de Licantén), que da cuenta de los hechos denunciados como accidente de Tránsito con resultado de muerte.

3.- A folio 1, Copia del Acta de Audiencia de Formalización en causa RIT 427-2016 del Juzgado de Garantía de Licantén.

4.- A folio 1, Mandato Especial de representación.

5.- A folio 1, Certificado de Anotaciones Vigentes de los Buses del demandado solidario, emanado del Servicio de Registro Civil e Identificación.

**Como Oficios:**

6.- A folio 53, Oficio de respuesta de la Fiscalía Local de Licantén, remitiendo copia de carpeta investigativa recaída en causa RIT 427-2016 del Juzgado de Garantía de Licantén.

7.- A folio 69, Oficio de Superintendencia de AFP que señala que el demandado Miranda Carvajal se encuentra afiliado a AFP Habitat.

**QUINTO:** Que para probar sus pretensiones, los demandados rindieron la siguiente prueba:

**Documental:** Elías Nataniel Miranda Carvajal.

Como Oficios:

1.- A folio 73, Oficio del Hospital Base de Curicó, que remite ficha clínica del demandado Elías Miranda Carvajal.

2.- A folio 75, Oficio de ACHS, que remite antecedentes de atenciones médicas y tratamiento del demandado Elías Miranda Carvajal.

3.- A folio 88, Oficio de Registro Civil e Identificación que señala que no hay registrados vehículos motorizados a nombre del demandado Elías Miranda Carvajal.

**Documental:** Oscar Mauricio Inzulza Salgado.

Como Oficios:

1.- A folio 67, Oficio del Ministerio Público, Fiscalía local de Licantén, que señala que la institución no determina la existencia de seguros involucrados para efectos de la persecución penal.

2.- A folio 71, Oficio de AFP Plan Vital, que indica que se realizó el pago de cuota mortuoria por un valor de \$390.781 y el pago de Herencia por un valor de \$23.475.045 respecto de la víctima de autos.

**SEXTO:** Que a folio 106 se cumplió la **medida para mejor resolver** decretada en la causa, consistente en acompañar copia de sentencia dictada en juicio oral simplificado efectivo en causa RIT 427-2016 del Juzgado de Garantía de Licantén en contra del demandado de autos Elías Nataniel Miranda Carvajal.

En la misma se señala en su considerando octavo en la valoración de la prueba, que fue acreditado un tipo culposo de delito en el cual el resultado le es atribuible normativamente al imputado Elías Nataniel Miranda Carvajal, en cuanto al fallecimiento de la víctima Oscar Humberto Epulef Salas el día 07 de junio de 2016. Agrega ese considerando, en su penúltimo párrafo, que la víctima lesionada era Oscar Humberto Epulef Salas, falleció el mismo día del accidente a las 10:30 horas, producto de las lesiones sufridas, acreditado ello por informe de autopsia 166-2016 el cual señala como causa de muerte politraumatismo, siendo las lesiones compatibles con accidente de tránsito.

En el considerando décimo de la sentencia se señala que la relación de causalidad entre la muerte producida a Oscar Humberto Epulef Salas y la acción desplegada por el imputado Elías Nataniel Miranda Carvajal, se encuentra acreditada con la prueba rendida.

En el considerando undécimo se señalan los hechos que se tuvieron por acreditados en la causa, referentes a la existencia del cuasidelito y el resultado de muerte culposa.

Finalmente en la parte resolutive del fallo se declara que se condena a Elías Nataniel Miranda Carvajal a la pena de sesenta días de prisión en su grado mayor, como autor de cuasidelito de



**Foja: 1**

homicidio en la persona de Oscar Humberto Epulef Salas, perpetrado en la comuna de Licantén el día 07 de junio de 2016.

Además, a folio 109 se cumplió una segunda **medida para mejor resolver**, consistente en acompañar a la causa los certificados de nacimiento de los tres demandantes. Con dicha medida se estableció con certeza jurídica el vínculo de parentesco entre los demandantes y quien figura sindicada como víctima por el obrar del demandado principal, surgiendo claro de tales instrumentos que este era el padre de los demandantes; consecuentemente, se establece con claridad la edad de cada uno de ellos, lo cual aportará antecedentes graves, precisos y concordantes para efectos de la resolución mediante presunciones de lo debatido como fondo en la causa, esto es, la eventual cuantificación del daño extra patrimonial demandado.

**DE LA PRUEBA.**

**SÉPTIMO:** Que respecto de la prueba rendida en la causa por las partes, se puede señalar que ella es de un único tenor, esto es, prueba instrumental. Por lo anterior, analizada ella de acuerdo a la Ley, hace plena prueba de lo que se contiene por la misma, pues en la mayoría de los casos son instrumentos públicos o copias de los mismos, los cuales no han sido objetados por inexactos por las contrarias; de igual modo en cuanto a los instrumentos privados, los cuales tampoco han sido objetados una vez puestos en conocimiento de las partes contrarias, todo lo anterior al tenor de las normas de los artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil.

En el mismo sentido las probanzas pedidas por el Tribunal, pues ellas recayeron en acompañar instrumentos de carácter público, tal y como lo es una sentencia judicial y certificados de nacimiento de los demandantes, por lo que dichos instrumentos hacen plena prueba de lo que en ellos se refiere.

**OCTAVO:** Que, tomando en consideración la prueba rendida y contrastada ella con el único hecho fijado por el Tribunal como sustancial, pertinente y controvertido, se puede tener por establecido en la causa que, en primer término, se ha acreditado por sobre todo con la propia prueba traída por el Tribunal (Sentencia en causa penal RIT 427-2016 del Juzgado de Garantía de Licantén) que el actuar del demandado Miranda Carvajal ha ocasionado perjuicios a los demandantes, ya que se logró establecer en esa prueba instrumental que se configuró la responsabilidad penal del demandado en la muerte de Oscar Humberto Epulef Salas, padre de los demandantes, la cual ocurrió con fecha 07 de junio de 2016, con motivo del accidente de tránsito de igual fecha en que el conductor del vehículo que colisionó al de la víctima fue el demandado Miranda Carvajal y, por consiguiente, fluye de ese solo hecho la existencia de perjuicios a reparar, por la existencia de la responsabilidad extracontractual adquirida por el demandado en cuestión, al ocasionar la muerte del padre de los demandantes.

Lo anterior, porque la instrumental traída o acompañada por las partes son solo prueba indiciaria, ya que en ellas no se establecía ni configuraba con certeza jurídica la responsabilidad penal del demandado, fue solo con la copia de la sentencia del proceso penal en donde se pudo tener por establecida esa responsabilidad y traspasar entonces la relación de causalidad entre la conducta desplegada por el demandado y el resultado de la muerte culposa del padre de los demandantes a la responsabilidad civil extracontractual surgida para el demandado y que origina los perjuicios a los demandantes.

En el mismo sentido, se acreditó con la prueba instrumental rendida por la demandante que el vehículo que conducía el demandado Elías Miranda Carvajal al momento de colisionar al de la víctima era el Placa Patente Única UF-61-77, el cual registra como propietario al demandado solidario don Oscar Mauricio Inzulza Salgado.



**Foja: 1**

Por otro lado, en cuanto a la naturaleza y monto de los perjuicios sufridos por los demandantes de autos, que era la segunda parte del hecho a probar, ninguna prueba se acompañó en la causa, quedando tales materias entonces a lo que el Tribunal en su prudencia pueda decidir.

**EN CUANTO AL FONDO.**

**De la Configuración de la Responsabilidad Extracontractual.**

**NOVENO:** Que, una de las primeras alegaciones controvertidas por las partes, dice relación con la calidad de los demandantes y quiénes de ellos tiene legitimación activa para concurrir en la causa. Menester es señalar que en un principio la demanda fue interpuesta por quienes figuran como hijos del fallecido en accidente de tránsito y también su cónyuge, cuestión rebatida por los demandados, ya que al momento del accidente la víctima se encontraba divorciada. En efecto, el procedimiento fue corregido y luego la propia demandante al evacuar su Réplica, refirió la efectividad del divorcio entre la víctima (padre de los demandantes de autos) y doña Erika del Pilar Contreras Pereira, por lo que debe dejarse en claro que ella no es demandante en la causa, al no tener actualmente ningún tipo de vínculo con la víctima de la causa penal, siendo aceptada únicamente su comparecencia en la causa al ser la representante legal del hijo menor de edad de la víctima de autos. Respecto al resto de los demandantes, si bien no se acompañó de su parte prueba alguna para acreditar el parentesco, el Tribunal ordenó acompañar aquello como medida para mejor resolver y así constan entonces en la causa que todos los demandantes son hijos de la víctima Oscar Humberto Epulef Salas.

Otro punto debatido fue sobre la fundamentación de la demanda en cuanto a la normativa legal citada en relación a la Ley de Tránsito, pero lo cierto es que ninguno de los demandados interpuso excepciones dilatorias en ese específico sentido y, además, de la revisión de la norma actualizada de la Ley N° 18.290 sobre Tránsito se observa que el articulado citado por la demandante sí coincide con lo preceptuado en el cuerpo de la demanda, ya que el artículo 108, inciso segundo de dicha Ley señala que “Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atentos a las condiciones de tránsito del momento”; el artículo 165 señala que “Toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecidas en esta ley, será responsable de los perjuicios que de ello provengan” y; el artículo 169, en su inciso segundo, indica que “El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente”. Como se observa, todas las normas citadas por la demandante coinciden con los preceptos legales utilizados para interponer la demanda y tiene el mismo sentido de aquella, esto es, la obligación de todo conductor de mantenerse atento a las condiciones de tránsito; la configuración de la responsabilidad (penal y civil) del autor de la contravención a la norma anterior (establecida como deber de cuidado) para resarcir los perjuicios derivados del hecho y, finalmente, la responsabilidad solidaria emanada de la contravención ya referida, respecto de quien sea propietario del vehículo y no lo conduzca al momento de la contravención.

**DÉCIMO:** Que, dentro de la misma esfera de discusiones de fondo entre las partes, surgió la relativa a la efectiva configuración de la responsabilidad civil extracontractual del demandado principal, así como también respecto de la ausencia de la relación de causalidad para provocarla y la falta de sentencia judicial que estableciera ciertamente la misma.

En este punto, la mayoría de las alegaciones de los demandados, supone que la no existencia de sentencia penal condenatoria previa para el demandado principal, hace improcedente la condena en sede civil. Lo cierto es que –efectivamente– al inicio de la tramitación de la presente causa no existía una sentencia penal en contra del demandado principal de autos, pero tal sentencia penal tiene solo un carácter declarativo y no constitutivo de la responsabilidad civil extracontractual,



**Foja: 1**

por lo que no es obstáculo la falta de sentencia en sede penal para proceder civilmente, ya que perfectamente puede una sentencia penal declarar la existencia de la responsabilidad civil extracontractual generada en un tiempo previo, tal y como ha sido el caso sub lite, toda vez que la responsabilidad civil extracontractual nace del hecho dañoso mismo que la origina y no desde la sentencia penal que declara la responsabilidad en esa sede.

En el mismo sentido, las alegaciones respecto de la presunción de inocencia del demandado principal, además de la alegación sobre la falsedad de haber incurrido en un manejo imprudente el mismo o de la falta de acreditación de la relación de causalidad entre la conducta desplegada por el demandado principal como chofer y la muerte del padre de los demandantes como víctima de dicho accidente, ha quedado completamente desvirtuada, ya que obra dentro de la causa la sentencia judicial de competente Tribunal que se condena al demandado principal Miranda Carvajal como autor de cuasidelito de homicidio en la persona de Oscar Humberto Epulef Salas, padre de los demandantes, sentencia que además se encuentra firme y ejecutoriada a la fecha, por lo que no existe discusión jurídica alguna en cuanto a la calidad de autor de cuasidelito penal por parte del demandado principal de autos y, en consecuencia, además se configura la responsabilidad civil extracontractual emanada del mismo acto propio del demandado, según lo dispone el artículo 2314 del Código Civil, encontrándose por ello mismo obligado civilmente a resarcir el daño causado.

En concordancia con el punto anterior, menester es ratificar que la sentencia penal en contra del demandado principal acreditó en forma concreta que el actuar del mismo fue negligente, ya que previo al choque con el vehículo conducido por la víctima Epulef Salas (padre de los demandantes), ya el demandado principal había impactado a dos vehículos sin haber detenido su marcha, por lo que fluye evidente entonces la culpa (negligencia) en el obrar del demandado principal y con ello el nexo causal asoma más que prístino para la configuración de la responsabilidad civil extracontractual.

De igual modo la responsabilidad solidaria del demandado Oscar Inzulza Salgado, ya que con la prueba rendida por la demandante, quedó acreditado que el dueño del vehículo Placa Patente Única UF-61-77, que impactó al del padre de los demandados, es el demandado solidario de esta causa y, por consiguiente, atendido lo establecido en el artículo 169 de la Ley de Tránsito su responsabilidad solidaria quedó correctamente configurada, ya que este demandado no acreditó la excepción del artículo 169 de la Ley de Tránsito en cuanto a establecer que la conducción de un vehículo de su propiedad por parte del demandado principal fue contra su voluntad.

**De los perjuicios demandados.**

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, en lo que respecta a la evaluación del daño, ello como se dijo quedará finalmente a la prudencia del Tribunal, ya que no se acompañó prueba alguna a la causa que diera cuenta de la real cuantía del mismo.

En efecto, se solicita por los demandantes que se condene al pago de \$280.000.000 (doscientos ochenta millones de pesos) por concepto de indemnizaciones, desglosándose en \$3.000.000 por concepto de daño emergente; \$78.000.000 por concepto de lucro cesante (ambas como daño material) y; \$200.000.000 por concepto de daño moral.

Respecto del primero de los montos, el daño emergente, la demandante no rindió prueba alguna para sustentar su pretensión de indemnización en ese quantum, no hay nada acompañado para acreditar un daño emergente de tres millones de pesos, más cuando de lo señalado en la etapa de discusión quedó más o menos claro (también del tenor de la sentencia penal) que la víctima y causante de los demandantes murió a las pocas horas de ocurrido el accidente producido por el demandado principal, por lo que la generación de daños emergentes en dicha suma parece alejado de la realidad, máxime si la atención médica se realizó en un recinto de salud asistencial público,



**Foja: 1**

por lo cual resulta poco probable que dichos gastos o daños materiales o patrimoniales provenientes del accidente mismo sean superiores a la suma de \$1.000.000 (un millón de pesos).

En lo que respecta al lucro cesante, esta solicitud se basa en lo que eventualmente pudo ganar el padre de los demandantes hasta su jubilación y la presumible pérdida de esos recursos para su círculo familiar. No obstante lo anterior, del propio reconocimiento de la parte demandante dentro del juicio, estas no tenían vida familiar habitual con su padre, pues estaba divorciado y los hijos (hoy los demandantes) tiene el mismo domicilio de la madre, siendo que además dos de los hijos son mayores de edad, por lo que en consecuencia los dineros que su padre pudo haber percibido, en realidad solo abarcan a los intereses del hijo menor de edad, mientras lo fuera, o bien, siendo mayor de edad, se mantuviera estudiando para estar aún obligado a los alimentos la víctima, pero nada de ello puede ser acreditado, pues se encuentra solo en la esfera de los supuestos y por ello es un antecedente imposible de verificar. Sin perjuicio de lo anterior, debe entenderse que es efectivo que la pérdida del padre para los demandantes –a una edad en que se encontraba laboralmente vigente– genera un estancamiento en el patrimonio del mismo, el cual de haberse este mantenido con vida podría haberse incrementado, siendo con ello una merma futura, pero real, del patrimonio de su causante. En base a ello y tomando en consideración que solo el demandante menor de edad dependía económicamente de la víctima causante y que sus padres se encontraban divorciados, por lo que a cada uno tocaba por igual su manutención, los ingresos laborales obtenidos por la víctima causante estaban principalmente orientados a su propia manutención por lo que tampoco resulta lógico la incorporación integra de esos dineros en una merma del patrimonio de los demandantes, por lo que la suma de lucro cesante no puede ser superior a la suma de \$9.000.000 (nueve millones de pesos) atendida la edad de su padre al momento del accidente, lo cual lo tenía más cercano de la edad de jubilación que de la edad productiva y, que no se ha acompañado ningún antecedente por los hijos demandantes que muestre una calificación profesional superior de su padre que indique la obtención de recursos por sobre la media.

En cuanto al daño moral, nuevamente la alegación de la demandante recae principalmente en la situación de su ex cónyuge, pero es claro que ella no tiene derecho alguno a indemnizarse, por lo que no existe –nuevamente– prueba alguna de la entidad del daño moral de los demandantes reales de la causa. En concordancia con lo anterior, se ha indicado por la doctrina que “el daño moral está constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una persona que se obligaba a respetarlo” (Carmen Domínguez), por lo que debe acreditarse dicho menoscabo y si bien se encuentra acreditado el grado de parentesco entre los demandantes y la víctima de cuasidelito, con lo cual se configuraría de por sí el menoscabo constitutivo de daño moral, ello no opera de forma absoluta, pudiendo la demandada desvirtuar lo que por lógica simple se presume, esto es, la existencia de distanciamientos o descuidos hacia la víctima por parte de los ahora demandantes para desvirtuar el daño moral, lo cierto es que no existe prueba alguna en ese sentido, siendo solo el propio reconocimiento de los demandantes, sobre el hecho de que su domicilio es el materno y que ambos padres se hallaban divorciados, lo que altera en grado mínimo la normalidad de la relación filial que permite concluir, sin lugar a dudas, que el daño moral puede encontrarse acreditado con la presunción grave y precisa de que la muerte de un padre produce aflicción y sufrimiento. Lo anterior también ha sido señalado por nuestra Excelentísima Corte Suprema en su sentencia en causa ROL N°2599-2015 cuando indica que acreditado el vínculo familiar “considerando únicamente como fundamento del daño moral, dado su carácter meramente subjetivo, se encuentra en la propia naturaleza afectiva del ser humano, puede decirse que bajo circunstancias de normalidad la muerte de un cónyuge produce aflicción y dolor, más aun cuando dicho deceso es consecuencia de un hecho ilícito que repentinamente interrumpe la vida de un ser querido”, cuestión aplicable enteramente al caso sub lite por analogía respecto de los cónyuges e hijos que sobreviven al deceso de un familiar directo. Por lo anterior, la posición



**Foja: 1**

sostenida por la Excelentísima Corte, en cuanto a la posibilidad de presumir fundadamente la existencia de daño moral a partir de hechos legalmente acreditados, pero sin acreditación del quantum (o extensión específica) de ese daño, dan el sustento doctrinario y legal para acoger la demanda en los términos en que se indique.

Ahora bien, el monto a indemnizar por daño moral es difícil de cuantificar, ya que el grado de aflicción sufrido por cada uno de los demandantes es independiente, lo cierto es que todos los demandantes comparten el mismo vínculo con la víctima, ya que son sus hijos y en consecuencia no habría un principio de diferenciación entre ellos; no obstante lo anterior, si se puede y debe diferenciarse a los demandantes en cuanto a la edad de cada uno de ellos, pues el grado de dependencia de la víctima no es el mismo, pues dos de ellos ya son mayores de edad, Oscar Eduardo actualmente tiene 26 años y Fabiola Andrea tiene actualmente 30 años y, por lo tanto, tienen independencia física y económica a su respecto, no así en cuanto al hijo menor de edad, Martin Alejandro que actualmente tiene 12 años, toda vez que aquel dependía económicamente del causante, más no en lo referente a los cuidados físicos, dado el divorcio entre el causante y su cónyuge, ya que esta última es quien tiene a su cuidado al demandante menor de edad; lo anterior, sin perjuicio de que la muerte de su padre que origina esta causa ocurrió en junio de 2016. En ese sentido el quantum de las indemnizaciones debe contemplar el máximo posible para el resarcimiento del daño sufrido. Como se dijo, la presunción de la existencia del daño extra patrimonial se puede extraer desde el mismo vínculo familiar o de parentesco existente y la necesidad de protección física, psíquica y económica de parte de su padre.

Por lo anterior, teniendo presente que la edad de la víctima lo tenía en las postrimerías de la vida productiva para un trabajador no calificado, pero que su fallecimiento pudo presumiblemente causar un daño moral alto, atendido el estrecho vínculo de parentesco, permiten al Tribunal establecer que el daño moral para aquellos demandantes que son hijos ya mayores de edad alcanza la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno de ellos y la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos) para el hijo menor de edad.

**OTRAS CONSIDERACIONES.**

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, sin perjuicio de la falta de prueba para acreditar la entidad del daño o los perjuicios a indemnizar por los demandados, lo cierto es que en la actualidad y debido a la falta de uniformidad de criterios para establecer montos indemnizatorios igualitarios en casos análogos, se han realizado esfuerzos tanto a nivel del Poder Judicial como de Centros de estudio y Universidades a fin de poder estandarizar los montos que se otorguen por indemnizaciones de carácter extra patrimonial, donde es difícil cuantificar el tipo de daño subjetivo como lo es el moral.

Así, existe incluso en la propia página virtual del Poder Judicial un Baremo Jurisprudencial Estadístico sobre indemnización por daño moral, a efectos de mostrar cuadros comparativos de diversos fallos; no obstante lo anterior, no existen casos similares al de autos en donde la víctima sea un adulto y con hijos (todos de iguales edades a las del caso sub lite) y que no viven con él, por lo que no existe estadística exacta asociada a ello, lo más cercano en condiciones de búsqueda arroja que la estadística ha sido otorgar una suma aproximada de 1.981 Unidades de Fomento como indemnización por daño moral, algo cercano a la suma de \$54.000.000 (cincuenta y cuatro millones de pesos), pero solo por ese concepto de daño moral y sin incluir el daño patrimonial, por lo que la suma señalada en el considerando anterior (setenta millones en total por daño moral), considerando la existencia de tres hijos, se acerca a los criterios jurisprudenciales estándar.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, como ya se señaló previamente, la falta de prueba en la causa ha hecho recaer la resolución de la misma en las condiciones promedio observables para resolver en la prudencia del Tribunal, lo cual se acerca –de todos modos– a los criterios jurisprudenciales referidos en el considerando anterior.



**Foja: 1**

Por lo ya referido en el desarrollo y análisis de la prueba y el fondo de lo debatido, no existe ninguna probanza acompañada en la causa que haga al Tribunal tomar a una decisión o resolución distinta.

Por tales consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1712, 2314 y siguientes del Código Civil, artículos 144, 159, 160, 170, 254, 342, 346 y 430 del Código de Procedimiento Civil, artículos 108, 165 y 196 de la Ley N° 18.290 de Tránsito y demás normas que resulten aplicables en la especie, **Se Declara:**

**I.-** Que se acoge parcialmente la demanda deducida a folio 1 de autos, con fecha 6 de diciembre de 2016, por Fabiola Andrea Epulef Contreras, Oscar Eduardo Epulef Contreras y Martín Alejandro Epulef Contreras, en contra de Elías Nataniel Miranda Carvajal y solidariamente en contra de Oscar Mauricio Inzulza Salgado, todos ya individualizados, solo en cuanto se condena a los demandados a pagar a los demandantes en forma solidaria las siguientes sumas:

**a.-** Por concepto de daño emergente, la suma de \$1.000.000 (un millón de pesos).

**b.-** Por concepto de lucro cesante, la suma de \$9.000.000 (nueve millones de pesos).

**c.-** Por concepto de daño moral: la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno de los demandantes Fabiola Andrea y Oscar Eduardo y; la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos) para el demandante Martín Alejandro, todos Epulef Contreras.

**II.-** Que las sumas señaladas previamente devengaran intereses corrientes para operaciones no reajustables entre la fecha que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada y aquella en que se produzca el pago efectivo.

**III.-** Que no se condena en costas a los demandados al haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese personalmente o por cédula.

Anótese, Regístrese, Archívese en su oportunidad.

Dictada por don **Cristian Albarrán Cáceres**, Juez de Letras Titular de Curepto.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Curepto, cuatro de Enero de dos mil diecinueve**





